

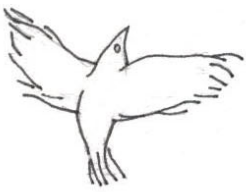
Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

MAYO DE 2005

AÑO IV • Nº 59

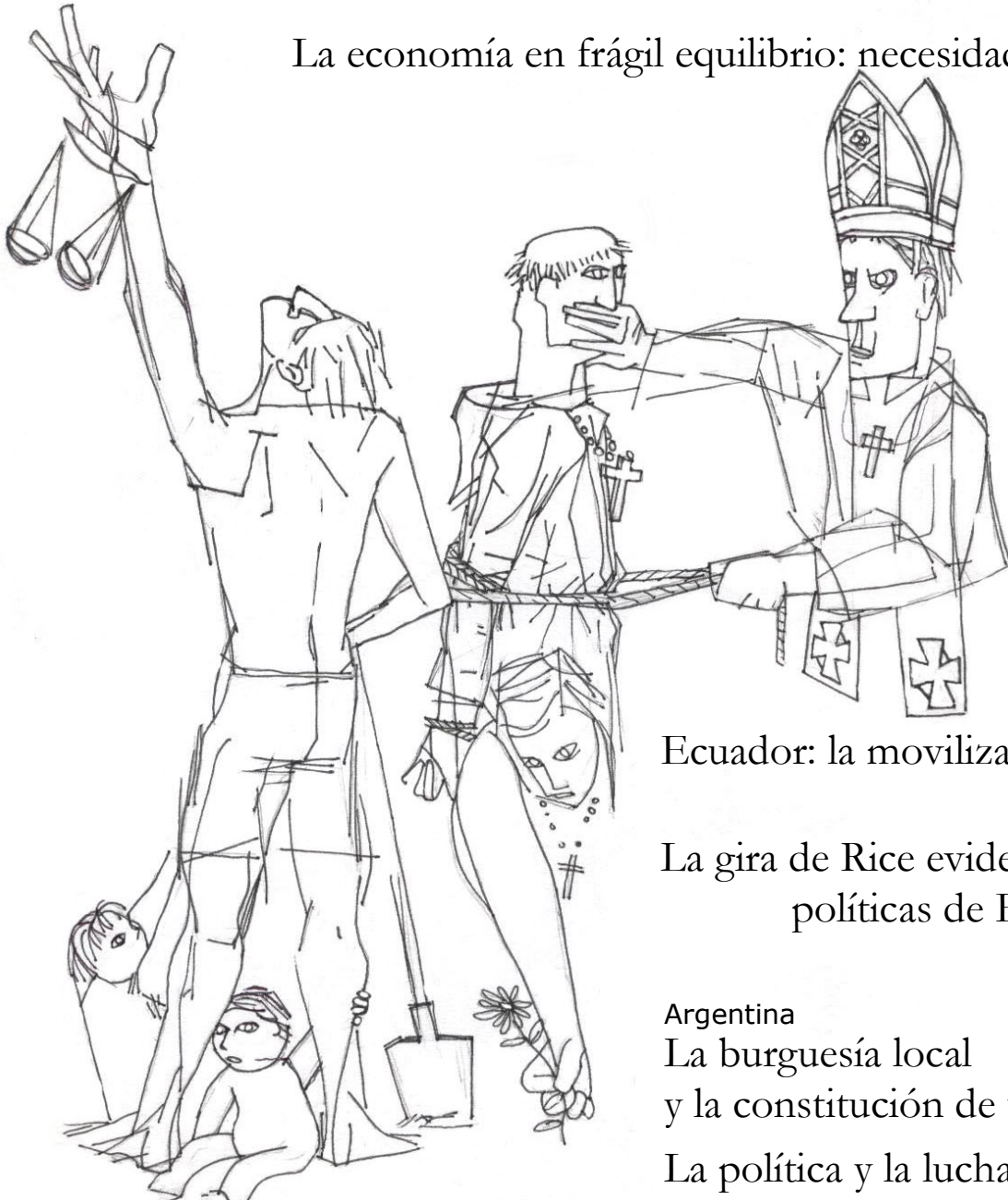
1 PESO



Situación Mundial

Sucesión papal: entre “paz y trabajo” y el “cardenal no”

La economía en frágil equilibrio: necesidad y herejía



América Latina

Ecuador: la movilización popular echa a otro presidente

La gira de Rice evidencia las dificultades políticas de EE.UU. en la región

Argentina

La burguesía local
y la constitución de un Estado garante

La política y la lucha de intereses

Situación Mundial

3 Pelea por las ganancias

La economía en frágil equilibrio: necesidad y herejía

5 Situación política

La lucha "política", cada vez más presente

Elección papal: martirio mediático y sucesión

América Latina

10 Pelea por las ganancias

Entre el ALCA y la UE: las peleas en el MERCOSUR

10 Coyuntura Política

La gira de Rice evidenció los problemas políticos de EE.UU. en la región

Estados Unidos no logró imponer su voluntad en la OEA

Voto en contra de Cuba en la ONU: ¿quién fue el derrotado?

México: el "desaforado" López Obrador y las tensiones políticas

14 Conflicto Social

Ecuador : la movilización social pide "que se vayan todos"

Argentina

16 Pelea por las ganancias

Frente externo: de deudas impagas, reformas fiscales, bancarias y "otros asuntos"...

Subvenciones, protección y apoyo político. Las demandas de la burguesía local.

19 Coyuntura política

Lucha de intereses en la interna del PJ

Y en el resto del país... también

El movimiento obrero, hacia fuera y hacia dentro.

21 Conflicto social

Análisis de Coyuntura

Revista Mensual
Mayo de 2005
Año IV • Nº 59

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

Fuentes consultadas: EE.UU.: *Wall Street Journal* (WSJ); *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP) – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (EUn) – Colombia: *El Tiempo* (Et) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN)

Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar

Números anteriores: www.geocities.com/informecon

En este número

Fuimos testigos durante el mes que pasó de dos grandes cumbres en Roma y en Washington. Una espiritual y “cada muerte de obispo” (de Roma en este caso), la otra financiera y periódica: el cónclave de cardenales eligió al sucesor de Juan Pablo II, y se realizó la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y a pesar de lo fuertes que pudieran parecer las convergencias entre el conservatismo de unos y el neoliberalismo de otros, a la hora de ponderar la situación actual, no deja de evidenciarse una contradicción que la Iglesia muestra en sus relaciones internas y hacia fuera: los “noes” hacia dentro contra un relación menos ortodoxa hacia nuevas realidades y menos conservadora frente a la realidad social, conviven con condenas reiteradas a la exclusión social y a la guerra. En este punto no puede sino chocar con un capital que –como neoliberalismo– no puede dejar de “ofrecernos” más guerra y más miseria como política para dar salida a su crisis.

Y así vemos en Situación Mundial los resultados de esas cumbres. En Washington, más recomendaciones de reforma par la Unión Europea y Japón, y de equilibrar los desbalances entre Estados Unidos y Asia. En un caso se trata directamente de más miseria para los trabajadores de esos países. En el otro, de hacer un malabar imposible que a la vez no frene al centro de demanda mundial (EE.UU.) pero que sí reviera los flujos de crédito que se absorben para mantener ese nivel de consumo. En Roma, se entronó a un cruzado contra los sectores más progresistas de la Iglesia, pero que aún así mantiene el llamado por paz y trabajo.

En América Latina está por demás claro cómo las políticas neoliberales diseminan pobreza. Y de allí derivan directamente algunas de las novedades políticas de este mes, unificables todas ellas en la búsqueda de alternativas y de escapar a la influencia de EE.UU. (o al menos de los términos que a Washington le gustarían), siendo que este país respalda esas políticas neoliberales garantizándolas con su hegemonía política sobre toda la región. Así, los ecuatorianos han volteado a su presidente Lucio Gutiérrez, que de promesas de políticas alternativas pasó muy pronto a ortodoxias neoliberales. Y así en México se detuvo la ofensiva oficialista contra López Obrador, un presidenciable con chances para las próximas elecciones que se postula como contrahegemónico. Además, los efectos de todo esto se notan también en la esfera diplomática: la gira de la Secretaria de Estado de EE.UU. por cuatro países latinoamericanos dio escasos frutos políticos.

Ya en Argentina, no somos ajenos a todo esto. El mundo de las grandes finanzas no cede en sus esfuerzos por absorber más recursos de la economía argentina trabando todavía la salida del default (que de todos modos ya sabemos que apenas da uno año de aire a nuestro país). Mientras tanto la burguesía con intereses locales busca establecer un estado garante (de sus propios beneficios) y los trabajadores buscan imperiosamente escapar de la pobreza del ocupado, lo que los lleva a organizarse y por lo tanto superar a las burocracias sindicales. Y todo el conjunto de fuerzas va alineando sus posiciones para la batalla electoral de octubre, que el gobierno insiste en plantear como un plebiscito a sus políticas.

Uf...

Situación Mundial

El proceso de acumulación de capital a nivel mundial, como sostuvimos en los dossier sobre finanzas, atraviesa una etapa de depuración intensa de sus distintas fracciones. Dicha profundización del ritmo es un emergente del proceso de concentración y centralización del capital: cada vez son menos los capitales individuales que gestionan directamente la producción de valor en cualquiera de sus fases y más los que se vuelcan a los mercados financieros para ser administrados y recibir una renta. Aquéllos que continúan en la labor de gestión pasan a conformar una capa, increíblemente conspicua en su forma de vida, en ocasiones mediática, y con numerosos contactos y relaciones alrededor de todo el globo. En definitiva, se trata de auténticos “políticos” que gestionan la reproducción del capital de los distintos espacios políticos de la acumulación, reproducción cada vez más mundializada. Esta característica se ve disimulada en parte por el desarrollo histórico. Éste determinó un despliegue caótico de la concentración y centralización, que no responden estrictamente a la forma política sino a las aleatorias posibilidades de sobrevivir al proceso que se les presentan a las personificaciones del capital: a cada empresario las oportunidades o los riesgos se les

revelan en infinidad de formas, en las que intervienen múltiples factores de la vida social. De esta forma, al menos por un tiempo, los vulgarmente llamados “magnates”, daban la impresión de estar abocados únicamente a los negocios, esto es, a la “economía”. Una vez más, fue necesario acompañar la construcción del sentido acerca de lo que la realidad reflejaba, para que los conflictos sean percibidos como provenientes exclusivamente de la esfera política. Para rastrear los orígenes de dicha construcción ideológica debemos retrotraernos a la segunda mitad de la década del '70, cuando se terminó de conformar el núcleo duro de la facción neoconservadora dentro del partido Republicano en EE.UU., que luego tomaría las riendas del poder con Ronald Reagan. El desafío de derrotar al espacio de acumulación soviético, cuya absoluta centralización de la producción había amenazado reiteradamente los cimientos de occidente, requería tareas urgentes. Al punto de forzar, inclusive, una definición al interior de la iglesia católica, que en ese momento presentaba dos líneas aparentemente irreconciliables. Aunque en otra fase del movimiento de la economía, el eco de aquéllos aún resuena en muchos sucesos actuales...

Pelea por las ganancias

La economía en frágil equilibrio: necesidad y herejía

“La reunión de ministros de economía y presidentes de los bancos centrales de los países del G-7, que tuvo lugar luego de una semana crítica en los mercados financieros coronada el viernes 15/4 con la mayor caída de la Bolsa de Nueva York en un solo día en los últimos dos años, culminó con pocas sorpresas. En su declaración final conjunta, se comprometieron a una ‘acción vigorosa’ para tratar los ‘desequilibrios globales’, en referencia al inmenso déficit comercial de EE.UU. y el correspondiente superávit de otros países, especialmente las economías exportadoras de Asia. Pero el comunicado no hizo más que repetir los pedidos que se vienen realizando continuamente a los países para que tomen medidas que contribuyan a achicar la brecha comercial de EE.UU., incluyendo una reducción del déficit fiscal en ese país y reformas estructurales en Europa y Japón” (WP, 17/4). Las reuniones del “más alto nivel” cargan las agendas de los mandatarios, funcionarios, intelectuales y empresarios, a la vez que se multiplica la diversidad de sus asistentes. Parece ser una herramienta importante, quizás la única, para zanjar cuestiones de política económica. Cabe preguntarse si una mayor utilidad no reside en el impacto simbólico que se busca ejercer sobre la opinión pública. Como sea, con seguridad es importante para conocer las intenciones de otra fracción del capital cuya representación personifica. Debajo de sus ropajes se puede esconder un vital aliado aunque nunca uno incondicional: todos

pueden devenir enemigos con el tiempo. Y aunque por ello los resultados de estos encuentros por lo general no son espectaculares, lo que por ellas circula siempre es digno de análisis. Intentemos establecer las relaciones entre los distintos elementos de la frase.

“El déficit comercial de EE.UU. alcanzó un nuevo récord en febrero, 61.000 millones de dólares. Las exportaciones permanecieron estancadas en 100.000 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 161.500 millones de dólares, un incremento de 2.600 millones respecto de enero, lo que representa un 1,6%” (WP 13/4). Es decir, la economía que más consume del globo se abastece en el exterior de los bienes y servicios que consume. En el sistema de pagos internacionales, entonces, una parte importante de dólares que se dirigen a adquirir bienes y servicios no regresan de la misma manera (a través de ventas EE.UU. al exterior). Esa masa de dinero, equivalente al 6% del PBI total, queda en el resto de los países que registran a su vez superávit con EE.UU. Una parte de esos dólares termina en manos del estado como impuestos al comercio exterior, y el resto va a engrosar el capital acumulado por las empresas, privadas, mixtas o estatales, que intervinieron en cualquiera de las fases de producción y circulación del producto en cuestión. La prolongación en el tiempo de esta situación de déficit por parte de EE.UU. requiere mecanismos que contrabalanceen el desequilibrio. Efectivamente, una parte importante de ese dinero va a retornar en forma de devoluciones de

préstamos, tanto de la esfera pública como privada y otra fracción lo hará bajo la forma de inversión en los mercados financieros, especialmente Nueva York, para evitar su depreciación inflacionaria, pues conforma una parte de la acumulación que no se precisa en el proceso productivo. Una tercera vía, va a tomar la forma de remesa de utilidades, y se desprende de la centralización y concentración del capital: la acelerada división internacional del trabajo que supone el proceso de radicación de la producción en aquellas regiones donde el capital tiene menos costos para valorizarse. Estos mecanismos compensatorios, como veremos, van a tener su importancia en los flujos del comercio internacional. Actualmente los países asiáticos aparecen como los beneficiarios en detrimento de EE.UU. y la Unión Europea. Considerando que en el 2004, China alcanzó el rango de principal socio comercial de EE.UU. y de Japón, y que *“en los dos primeros meses del año el déficit comercial de EE.UU. con China subió cerca del 50% para alcanzar los 29.000 millones de dólares”* (WSJ 2/5), lo que sucede en ese país viene marcando claramente la tendencia. La importancia aún es mayor con el final de las cuotas textiles en el comercio mundial el 1° de enero de este año, que significó un 75% de aumento de las exportaciones chinas a EE.UU. en ese rubro. El ingreso chino en la OMC, allá por 1995 y el retorno de Hong Kong a la órbita de Pekín en 1999, fueron eventos que marcaron el ingreso chino a la economía de mercado. Las inversiones extranjeras comenzaron a arribar y con el tiempo quedaron claras las ventajas para prácticamente todas las ramas de establecer fases de la producción en ese país. Inclusive las limitaciones que en teoría suponía un esquema político no necesariamente afín a un clima inversor beneficioso, fueron compensadas por la tasa de retorno. Ni lerdos ni perezosos, los grandes grupos económicos concretaron alianzas productivas con empresas chinas, privadas y estatales, para producir en la región. Podemos ver entonces, que una parte sustancial de la tan mentada sangría, retorna a los países de origen bajo la forma de ganancias obtenidas por ese mismo comercio. De hecho, la múltiple localización de la producción de las mayores empresas del mundo, que instalan plantas de producción alrededor de todo el globo, extiende esta situación a prácticamente todos los países de envergadura relativizando las estadísticas, que toman como base de registro el espacio de acumulación del estado nación. De modo que, los indicadores pasan a quedar distorsionados en relación a lo que sucede finalmente con el flujo del dinero. Entonces, del análisis que antecede, es necesario observar con mayor profundidad otros factores para determinar perdedores y ganadores de este proceso. Lo que es evidente que algo está sucediendo que escapa a las posibilidades de corrección por los gestores de política económica.

Recientemente, *“el dólar y los bonos del tesoro norteamericano se derrumbaron cuando el primer ministro japonés realizó declaraciones que sugieren que el banco central de ese país considere convertir una parte sustancial de sus reservas en otras monedas e instrumentos. Estos dichos surgen menos de un mes después de las versiones, luego negadas, que el banco central de Corea del Sur planeaba una medida similar. China, Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán detentan el 56% del total de títulos del Tesoro (de EE.UU.) en manos extranjeras”* (NYT 11/3). El crecimiento de las reservas en divisas por parte de los países asiáticos, que en el caso de China significó en el 2004 un salto de 200.000 millones de dólares, revela el volumen de capital acumulado en la reorganización productiva a escala mundial. En los países asiáticos se manifiesta por una necesidad mutua con las economías de la UE y EE.UU. en su doble rol de mercado de consumo de los productos y servicios finales y de mercado de bienes de capital y técnicas de producción vía radicación de inversiones. De esta forma, la parte del capital acumulado que permanece en Asia es absorbido en parte por el estado, interesado en sostener determinado nivel de sus monedas, mediante la captación de divisas extranjeras a cambio de sus propias monedas.

Mientras tanto, la otra parte del capital acumulado por las utilidades de ese comercio queda en manos de las empresas multinacionales. Estas van a registrar un incremento de liquidez que va a buscar un cauce para continuar con su apreciación. Los considerandos de la decisión van a alcanzar una dimensión internacional, más allá de una pertenencia “política” a algún espacio de acumulación. Es decir, las empresas disponen de una masa de dinero proveniente de operaciones del exterior que aún no han sido ingresados en la economía norteamericana. La estructura de tributación de ese país permite un desdoblamiento de las operaciones pues la forma en que grava las operaciones de los sujetos económicos no es territorial sino sustantiva. Esto quiere decir que no importa el lugar donde las operaciones gravadas por los distintos impuestos tienen lugar sino la persona, física o jurídica, que los lleve a cabo, vale decir, si esta registrada en EE.UU. Estructura que responde a las necesidades de una economía como la norteamericana, que avanza sobre otros capitales menores a lo largo y ancho del globo. De esta manera, que *“el crecimiento de la economía de EE.UU. disminuyó en el primer trimestre, creciendo a una decepcionante tasa anual del 3,1%, de un 3,8% en el trimestre anterior”* (WSJ 29/4) profundiza las dificultades de contribuir con el financiamiento de su ingente consumo. Su sostenimiento pasa a ser sostenido por medidas que postergan el problema para el futuro, como *“la ley adoptada por el congreso el año pasado que dará una única oportunidad de traer los 500.000 millones de dólares en utilidades realizadas en el exterior mediante el pago de una tasa de 5,25%, en lugar del 35% de la tasa corporativa normal*

(puede ser inocua), ya que las empresas pueden conseguir los fondos endeudándose en los mercados financieros con dichas ganancias como garantías” (NYT 14/1). Que está en absoluta consonancia con las últimas medidas impulsadas por el gobierno y en vías de aprobación por el congreso norteamericano. En las que “se aprueba el presupuesto del 2006, por 2,56 billones de dólares, con recortes de 10.000 millones en cinco años para el programa Medicaid, reducciones de impuestos por la suma de 106.000 millones y con la vía libre para permitir la exploración en búsqueda de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico” (NYT 29/4). Es decir, cimentar políticamente la confianza es vital para la presente forma de acumulación, sostenida artificialmente en base a la creación de capital ficticio (emisión de títulos de deuda para financiar el déficit). Asia, EE.UU. y la Unión Europea enfrentan el desafío de neutralizar las contradicciones entre las fracciones que integran el capital global de cada espacio político. Esa necesidad mutua permite desoír las exhortaciones del FMI, que en su informe de primavera “advirtió sobre la capacidad de las economías occidentales para sostener el conjunto de redes de protección (desempleo, sanidad, pensiones) que se conoce con el nombre de es-

tado de bienestar, destacando que resulta imperativo que Japón y Europa se sumen a EE.UU. para impulsar el crecimiento mundial” (EP 15/4). El problema está planteado (y postergado), al punto de pasar casi desapercibida “la reducción de la calificadora Standard & Poor’s a nivel de chatarra las calificaciones crediticias de General Motors y Ford, que hizo desplomar las cotizaciones de las acciones de ambas empresas” (WSJ 6/5). Pese a que en los días previos, contó con la inédita contribución (luego relativizada) del presidente de Toyota Hiroshi Okuda, quien dijo que “la industria automotriz japonesa necesitaba dar a Detroit ‘tiempo y espacio para recobrar el aliento’, al punto de sugerir que Toyota podría subir los precios de los autos vendidos en EE.UU. para flexibilizar las presiones competitivas” (WSJ 27/4). Esa expresión de necesidad mutua es categórica, teniendo en cuenta que los fabricantes automotrices obtienen entre un 60% y un 70% de sus utilidades en el mercado norteamericano, el cual en el último mes Toyota afirmó su segundo lugar en ventas incrementándolas un 29,5% (frente a una disminución de 4,8% de GM y un 0,1% de aumento de Ford).

Situación política

La lucha “política”, cada vez más presente

Las mencionadas condiciones de la economía requieren un liderazgo firme y decisivo, pues supone articular un orden que conlleva en su seno distintos imperativos y requerimientos para las fracciones del capital en cada espacio político de decisión. Si bien esto no es nuevo, el escenario actual se presenta sin un enemigo externo que aglutine y subordine las necesidades de los distintos sectores. Una vez más, la posición de EE.UU. en el concierto de las naciones lo establece como referencia obligada para el resto. Allí, las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado confirmaron la orientación política. Dentro de la alianza gobernante, la derecha neoconservadora y religiosa, cuya contribución electoral y burocrática fue decisiva, se permitió por ello trastocar los términos de la alianza conservadora. La expresión más visible de ello fue el inmediato reemplazo en el departamento de estado de Colin Powell, del ala liberal del partido republicano, por Condoleezza Rice.

El mes pasado continuó a paso seguro el avance de dicha facción, destacándose la designación, promovida por el presidente Bush, de Paul Wolfowitz como presidente del Banco Mundial, quien deja el cargo de subsecretario de defensa. Esta designación tuvo que enfrentar la reticencia europea y un infructuoso intento de otra facción por alimentar la oposición a la medida, impulsando mediáticamente la designación de Carly Fiorina, ex presidente de Hewlett Packard (NYT 2/3). La mayor subordinación del resto de las facciones de dicha alianza

no es, por supuesto, “gratuita”. Tanto en la dinámica política general de todas las facciones, que mostró una reñida aprobación del presupuesto en el congreso (por un estrecho 214-211 en representantes y 52-47 en senadores), como al interior del propio partido republicano con la atribulada elección de John Bolton como embajador ante las Naciones Unidas, los costos para alcanzar los acuerdos parecen incrementarse. Claro, con el desequilibrio entre las distintas partes de la alianza en el poder, resulta más complejo y trabajoso articular medidas que respondan simultáneamente a los intereses faccionales y a los generales. La designación de John Bolton, hombre del riñón del elenco gobernante, se encuentra trabada en el congreso en medio de un creciente corifeo a favor y en contra de la confirmación de la elección del presidente: “Caspar Weinberg secretario de defensa de Reagan, James Woolsey, ex director de la CIA y otros 64 diplomáticos y funcionarios retirados recomendaron su designación al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Richard Lugar (Indiana), en respuesta a una carta firmada por 62 ex funcionarios que critican su designación” (WP 4/4). Lejos de cejar, el conflicto continúa inconcluso revelando la férrea decisión de las distintas facciones: “Bush realizó una nueva defensa de su candidatura de John Bolton, pero allegados a Colin Powell, volvieron a expresar reservas en conversaciones con al menos dos senadores republicanos, lo que sugiere una profundización del abismo entre el ex secretario de estado y el presidente” (NYT 24/4). De cualquier manera, las perspectivas para el círculo que rodea al presidente aparecen más promisorias, más allá de lo que ello signifique

para la nación entera. De esta forma, una facción compuesta por una alianza estratégica entre las ramas energética y de armamento, con la presencia inevitable de la tecnológica, parece percibir la posibilidad de reducir la presencia de fracciones menores, de las mismas ramas e inclusive de otras ramas. La forma de desarrollo de la producción energética (que presupone un dominio económico, político y/o militar de las fuentes de crudo, que continúa holgadamente siendo la principal forma de producción de energía) fomenta una alianza casi natural con las fuerzas de seguridad y desestima cualquier posibilidad de realizar un proceso de deslocalización que no contemple las condiciones infraestructurales de su existir. El azar determinó la localización del petróleo y justamente esto imposibilitó al capital sustraerse de las determinaciones político ideológicas que acompañaron el desarrollo histórico, en la búsqueda de profundizar el proceso de división internacional del trabajo. La potencia de esos factores realzó las características personales construidas por la facción en el gobierno, haciendo del misticismo y la profecía un factor de movilización para nada desdeñable.

La elección papal de la iglesia católica, coincide parcialmente con la línea que orienta las acciones políticas de los principales países. Quizás el ascenso del flamante Benedicto XVI, sólo agregue a este alineamiento una percepción de que la dinámica de los tiempos que corren no puede sostenerse por largo tiempo. Tanto más o tanto menos, las líneas internas de la Iglesia parecen apostar, también, por postergar la decisión cuando la historia indique un camino menos incierto.

Elección papal: martirio mediático y sucesión

Como nunca antes, los avatares de la sucesión papal capturaron la atención de los medios. En cierta medida, esto obedece a que el largo pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) coincidió con un acelerado desarrollo de los medios de comunicación de masas, lo que posibilitó el carácter “*ciclónico, global y mediático*” (EP 17/4) de su papado (incluido el martirio “en vivo y en directo”). Pero la importancia del Papa se cimienta también en el peso político de sus intervenciones públicas, en tanto cabeza de una institución que suele caracterizarse como *el único partido político internacional*, especialmente luego del derrumbe de las estructuras que solventaban a los partidos comunistas de línea soviética. En la coyuntura actual, de desguace de las funciones sociales (educación, asistencia social) de los estados seculares, la Iglesia aparece disputando nuevamente espacios de control que le habían sido en buena medida arrebatados en Occidente desde fines del siglo XIX.¹

Por razones de espacio, nos resulta imposible referirnos, siquiera brevemente, a la historia de esta institución milenaria. Basta decir que la tradición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que deriva la autoridad de los obispos de los apóstoles, a la cabeza de los cuales se ubica el Papa (obispo de Roma y depositario del mandato que Jesús confirió a Pedro), así como la ortodoxia dogmática, son resultado de siglos de construcción política. Desde su consolidación a comienzos del Medioevo, la curia con actual sede en el Vaticano defendió su autoridad pastoral y política sobre la base de que la delegación de poder hecha por Cristo incluía la presencia del espíritu santo, gracia que le permite a la alta jerarquía interpretar la revelación y gestionar la salvación colectiva. En esta trayectoria sufriría la secesión por parte de otras iglesias cristianas (la ortodoxa durante el Medioevo, las reformadas desde el siglo XVI), que en conjunto aglutinan hoy casi al 50% de la cristiandad.

Actualmente el catolicismo agrupa a algo más de 1.000 millones de fieles bautizados, de los cuales cerca de 1.500.000 son religiosos rentados. El Papa posee formalmente una autoridad notablemente centralizada: los obispos, titulares de las unidades administrativas básicas, dependen de él, así como la burocracia del Vaticano y el Colegio Cardenalicio, un reducido grupo algo más de un centenar de obispos que poseen la prerrogativa de decidir la sucesión al pontificado. Esto permite al Papa influir notablemente en su sucesión y asegurar líneas de continuidad con su papado. La ampliación del Colegio, con la designación de 44 nuevos miembros en 2001, tuvo sin duda que ver con la elección, casi en tiempo récord, de Joseph Ratzinger, inspirador intelectual de la restauración de la ortodoxia que caracterizó al pontificado de Juan Pablo II.

El azote a la herejía.

Aún los medios menos sospechosos de “progresismo” se vieron obligados a poner de relieve que, detrás de los gestos mediáticos de mundanidad y ecumenismo, y la recreación populista del culto a la virgen y los santos (en sorprendente proliferación), que marcaron el estilo del pontificado de Wojtyła, se operaba una centralización política y doctrinal visible en las posiciones asumidas por la curia ante temas como la relación con otros cultos y con la ciencia, la homosexualidad, la anti-concepción y los derechos de las mujeres. Pero el sentido de la restauración operada por el papado polaco es ininteligible si no se examinan las consecuencias que siguieron al Concilio Vaticano II. Convocado por el Papa Juan XXIII, el concilio constó de cuatro sesiones, entre

subsahariana, por ejemplo, gestiona el 90% de las instituciones de enseñanza.

² Que incluye, desde el Concilio Vaticano I (1871), la infalibilidad en cuestiones doctrinales.

1962 y 1965. Bajo la consigna de adaptar la Iglesia y establecer un diálogo con el mundo moderno, se elaboraron 16 documentos doctrinales, en los que se incluía la instauración de un gobierno colegiado (en el cual los sínodos de obispos compartieran con el Papa la iniciativa y cierto margen de decisión autónoma), y la incitación a la participación de los laicos en la interpretación de la Biblia (lo que ponía entre paréntesis la infalibilidad de que gozaba la Iglesia en tanto portadora del “espíritu santo”). Como un símbolo del acercamiento de la jerarquía a los laicos, se decidió officiar la misa ya no en latín sino en las lenguas nacionales.

Las afirmaciones reformistas contenidas en los documentos del concilio legitimaron la orientación “social” al nivel de la jerarquía episcopal, especialmente en América Latina (que concentra casi un 50% de los fieles). En la Declaración final de los obispos en Medellín (1968), resultado de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), los obispos denunciaron el neocolonialismo, las estructuras de dominación y la opresión de clase que asolan el continente, a la vez que concluían con un diagnóstico de las raíces de la lucha armada: *“La paz es, ante todo, obra de justicia (...) La paz en América Latina no es, por lo tanto, la simple ausencia de violencia y derramamientos de sangre. La opresión ejercida por los grupos de poder puede dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino el germen continuo e inevitable de rebeliones y guerras. La paz sólo se obtiene creando un orden nuevo que comporta una justicia más perfecta entre los hombres”*. Los obispos decían basarse en los documentos surgidos del Concilio Vaticano II (especialmente el *Gaudium et spes*, en el cual el papado estipulaba nuevas relaciones de la Iglesia con el mundo moderno). Estas nuevas posturas eran resultado, sin embargo, de orientaciones precedentes: un año antes, 18 obispos latinoamericanos habían firmado una declaración (*“Mensaje de los obispos del Tercer Mundo”*, 8/1967) en la que definían al Tercer Mundo como *“proletariado de la humanidad actual”* y denunciaba el compromiso de la jerarquía eclesiásticas con los privilegios sociales. Las resoluciones de la II Conferencia del CELAM dieron impulso al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, así como a su elaboración doctrinal, la Teología de la Liberación, que incorporaba la lucha de clases como matriz de interpretación.

La restauración desencadenada desde el papado a partir de 1978 fue sistemática. Por un lado, los puntos de vista conflictivos con la línea ortodoxa se neutralizaron, al nivel de la jerarquía eclesiástica, mediante la anulación práctica de la “colegialidad”, un punto fuerte del Concilio Vaticano II. Las declaraciones de los sínodos requirieron del aval del papa para ser publicadas; y en alguna ocasión, como en el sínodo holandés de 1984, Juan Pablo II se arrogó la función de corregir sus declaraciones

finales. Por otro, se implementó una línea de designaciones tendiente a reservar para la derecha los centros de formación y el control de las parroquias. El Consejo Episcopal Latinoamericano, que en 1968 había organizado la Conferencia de Medellín, transformado lentamente en un baluarte de la restauración. Luego de la conferencia de Puebla de 1979 (a la que no fueron invitados los obispos “tercermundistas”) se inició la tarea de “limpieza”, que en Perú estuvo a cargo del obispo de Ayacucho, Luis Cipriani (uno de los 17 obispos del Opus Dei designados por Wojtyla en América Latina); en México la tarea corrió a cuenta del nuncio Girolamo Prigione, que obtuvo en 1995 la designación como arzobispo de México (la diócesis más grande la cristiandad) del derechista Norberto Rivera Carrera. Ninguna designación resulta tan ilustrativa como la de otro opusdeista, Fernando Saenz Lacalle, al arzobispado de San Salvador, en reemplazo de Oscar Arnulfo Romero, jesuita asesinado en marzo de 1980 por las fuerzas armadas de las cuales Saenz Lacalle era capellán. El papel de los laicos de derecha se incrementó, como en el caso de Michel Camdessus, ex director del FMI, fue promovido a consejero de la Comisión Justicia y Paz, abocada a la elaboración de las políticas sociales; no fue el caso de los laicos “progresistas”: la Juventud Obrera Cristiana Internacional, se gran influencia en los '60, vio surgir una competidora de derecha alentada por la curia.

Al interior de la curia se efectuó un desplazamiento de la influencia de la Compañía de Jesús a favor de movimientos de derecha como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Desde su fundación, los jesuitas se convirtieron en un elemento clave para el papado, tanto por tenerlo como centro de su devoción (a los tradicionales votos de pobreza, obediencia y castidad los jesuitas suman otro, el de obediencia al Papa), como por su fuerte acento en la preparación intelectual de sus cuadros que la ubicaron a la vanguardia de las políticas educativas de la iglesia. En vísperas del Concilio Vaticano II, la Orden estaba sufriendo un proceso de reorientación doctrinal, con el triunfo de su ala “progresista” norteamericana (encabezada por el teólogo J. Murray) por sobre la de los “tradicionalistas”, predominantemente españoles. En consecuencia, Juan Pablo II favoreció la incorporación de nuevos cuadros, más afines con su proyecto, provenientes en gran medida del Opus Dei, una organización históricamente vinculada con el falangismo español. El Opus adquirió en 1982 el estatuto de prelatura personal de la Santa Sede, lo que equivale a una diócesis extraterritorial, por lo que se lo sustrae al control de los obispos. Su encumbramiento quedó simbólicamente ratificado en 2002, cuando su fundador, el sacerdote Escrivá de Balaguer, fue canonizado en tiempo récord. Se transformaba en santo a un hombre a quien el Concilio Vaticano II hacía exclamar que *“hay una real pudrición, y*

actualmente parece que el cuerpo místico de Cristo fuera un cadáver en descomposición, que apesta” (LM Dipló, ed. Cono Sur, 1/2000).

Paralelamente, desde la Congregación para la Doctrina de la Fe (designación *aggiornada* que en la década del '60 se había adoptado para la Santa Inquisición), el actual Benedicto XVI impulsaba la impugnación doctrinal de la Teología de la Liberación. Dos instrucciones, de 1983 y 1984, iniciaron el “acta de acusación”: “La radicalidad de la Teología de la Liberación justamente conduce a que se la subestime en su seriedad, porque no cabe en ninguno de los esquemas de herejía conocidos hasta ahora (...) Algunos se sienten tentados a poner el acento de modo unilateral sobre la liberación de las esclavitudes de orden terrenal y temporal, de tal manera que parecen hacer pasar a un segundo plano la liberación del pecado, y por esto no se le atribuye prácticamente la importancia primaria que le es propia (...) La presente Instrucción tiene un fin preciso y limitado: atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles, sobre las desviaciones y los riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para la vida cristiana, que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista (...) Las tesis de las ‘teologías de la liberación’ son ampliamente difundidas, bajo una forma todavía simplificada, en sesiones de formación o en grupos de base que carecen de preparación catequética y teológica. Por esto los pastores deben vigilar la calidad y el contenido de la catequesis y de la formación (...) Se pondrá en guardia contra una politización de la existencia que, desconociendo a un tiempo la especificidad del Reino de Dios y la trascendencia de la persona, conduce a sacralizar la política y a captar la religiosidad del pueblo en beneficio de empresas revolucionarias” (Cardenal J. Ratzinger, “Presupuestos, problemas y desafíos de la Teología de la Liberación.”, 5/1/1984 e “Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación”, 6/8/1984). Expresión de esta “vigilancia” ejercida por los “pastores” es la todavía vigente prohibición de realizar la docencia en institutos católicos a los principales teólogos de dicha corriente, el suizo Hans Küng y el brasileño León Boff. En las últimas dos décadas, 140 teólogos sufrieron sanciones por “opiniones heterodoxas” (LM 21/4). El teólogo skrilankés Tissa Balasuriya fue incluso excomulgado por publicar un libro que problematizaba la supuesta virginidad de María y el concepto de pecado original (LM Dipló, ed. Cono Sur, 5/2002). En 1996, en Nicaragua, Juan Pablo II declaró que la Teología de la Liberación no tenía razón de ser, ya que el marxismo había muerto (LM 22/4).

Esta ofensiva doctrinal se correspondió con una vuelta al pasado en las concepciones del papado referentes a la relación capital-trabajo. En la encíclica *Rerum Novarum*, de 1891, León XIII había dejado en claro los lineamientos básicos que, entendía, permitía una convivencia armónica entre las clases:

La intangibilidad de la propiedad privada: “Poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza (...) Dios dio la tierra en común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos”.

El respeto de los trabajadores por la jerarquías: “Cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad se haya estipulado sobre el trabajo; no dañar en modo alguno al capital; no ofender a la persona de los patronos; abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover sediciones”.

El paternalismo por parte de los patronos: “No considerar a los obreros como esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano (...) Tampoco debe imponerseles más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas”.

El rechazo enérgico del socialismo: “Debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna a los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común”.

A fines del Concilio Vaticano II, el papado dio a conocer la encíclica *Populorum progressio* (1967) que replanteaban la postura oficial de la Iglesia, postulando un reformismo a tono con el impulso social del que dominó el concilio. En este documento, la propiedad privada ya no se consideraba inviolable: luego de plantear una crítica al régimen de monocultivo en el tercer mundo, que obedecía a los intereses de monopolios extranjeros, sugería que “el bien común, pues, exige algunas veces la expropiación, cuando algunos fondos (...) son un obstáculo para la prosperidad colectiva”, para concluir impugnando un sistema en el cual “la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto o, sin límites y obligaciones sociales que le correspondieran”. Resulta significativo el hecho de que en 1991, Juan Pablo II diera a conocer la encíclica *Centesimus annus*, en la cual se recuperaban enfáticamente los postulados y el espíritu de la *Rerum Novarum*: buena parte de la exposición está dedicada a celebrar la caída del bloque soviético y la sacralidad del derecho de propiedad. Las conclusiones auspician el futuro de un “capitalismo con rostro humano”, “una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación. Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad”.

Esta regresión doctrinal en las concepciones sociales estuvo a tono con el anticomunismo militante que caracterizó el pontificado de Juan Pablo II, especialmente durante su primera década, que coincidió con el vuelco agresivo de la política exterior norteamericana bajo Reagan. El Papa utilizó sus viajes para estimular un con-

trapoder allí donde el comunismo ejercía el poder, como en Polonia en 1979 (donde animó a la rebelión civil, que se concretaría un año después con la emergencia del sindicato Solidaridad, que contó con el apoyo financiero del banco Ambrosiano) y Nicaragua en 1983 (en donde apoyó explícitamente la unidad de los católicos en torno al obispo de Managua, el ultra reaccionario Obando y Bravo, luego promovido al cardenalato). Algo semejante intentó en Cuba, a la que visitó en 1992: a su regreso a Roma, Juan Pablo II declaró que su visita provocaría los mismos efectos que en Polonia en 1979 (LF 14/8). El Papa llegó a aprobar, en diciembre de 1981, el bloqueo a la U.R.S.S. y Polonia impulsado por los EE.UU., contra la posición adoptada por la Comunidad Económica Europea. La cruzada contra los regímenes comunistas se complementó con el vergonzante silencio sobre la situación de los derechos humanos en el cono sur (que implicó el asesinato de numerosos religiosos). En ocasiones, este apoyo tácito mutaba en explícito, como cuando en 1976, el actual cardenal y secretario de estado del Vaticano A. Sodano, entonces nuncio en Chile declaró, refiriéndose al régimen pinochetista: *"también las obras maestras pueden tener manchas; los invito a no detenerse en las manchas el cuadro, sino a mirar el conjunto, que es maravilloso"* (LM Diplo, 3/2002).

El inquisidor.

Lo que a primera vista resulta desconcertante es que la línea dominante en la curia del Vaticano, confirmada en la muy rápida elección para el pontificado del hombre que fue abiertamente su mentor intelectual, se atrincheró ya no sólo en el antisocialismo sino también en un fanático antiseccularismo. Las posturas ortodoxas referentes a el celibato sacerdotal, la imposibilidad de las mujeres de ejercer el sacerdocio, la homosexualidad, el divorcio, el aborto y la anticoncepción, contradicen la evolución de las sociedades capitalistas desarrolladas, potencian la pérdida de poder moral del papado, e irritan a los medios "moderados": *"Este es el hombre que los cardenales del cónclave acaban de elegir como Papa: un hombre intransigente, incapaz de concesiones cuando la "verdad" católica está en juego, convencido de que decir 'no' es un acto de caridad"* (LM 21/4). El propio Ratzinger nos da la pista que permite entender la regresión de la Iglesia a posiciones decimonónicas: *"Más se asimila la religión al mundo, más superflua se vuelve"* (LM 20/4). Auxiliar del cardenal reformista J. Frings durante el Concilio Vaticano II, Ratzinger vio con horror, siendo docente universitario durante mayo de 1968, como la apertura se transformaba en una corriente incontenible de deslegitimación de una jerarquía eclesiástica cuya máxima preocupación era obturar el cambio social. En la "Instrucción" de 1984 ya citada, Ratzinger explicaba el surgimiento de la Teología de la Liberación por la combinación del aumento de las disparidades sociales en el Tercer Mundo y la apertura al

mundo del Concilio Vaticano II: *"La idea de la apertura al mundo y del compromiso con él, se transformó frecuentemente en una fe ingenua en las ciencias, fe que acogió las ciencias humanas como un evangelio nuevo, sin querer reconocer sus límites ni sus propios problemas. La psicología, la sociología y la interpretación marxista de la historia fueron consideradas como científicamente seguras y, en tal calidad, como instancias ya no cuestionables por el pensar cristiano"*. No se pueden obviar los evidentes puntos de contacto entre el antiseccularismo de la curia que gobierna el Vaticano y el de los grupos neoconservadores que apuntalan a Bush en los EE.UU. El año pasado, el mismo Ratzinger puso en evidencia estas coincidencias al intervenir en la elección norteamericana declarando que *"aquellos que hacen campaña y votan a favor de leyes permisivas sobre el aborto y la eutanasia, cometen un gran pecado y no merecen recibir la comunión"* (LF 21/4), en obvia alusión a Kerry. Lo paradójico es que el antiseccularismo republicano tiene como fuerza de choque a grupos evangélicos movilizadas que no reconocen la autoridad del Papa.

La intransigencia como estrategia no está exenta, sin embargo, de problemas. El propio Juan Pablo II debió resignarse a la pérdida de influencia real en el núcleo histórico del catolicismo, el continente europeo, pérdida reflejada en la imposibilidad de frenar las leyes sobre los derechos de los homosexuales y la anticoncepción en Francia, España, Italia, la misma Polonia, sociedades mayoritariamente católicas. También fracasó en su empeño por lograr que la Constitución Europea hiciera mención a las "raíces cristianas de Europa", y en bloquear la incorporación de Turquía a la Unión.

Por último, cabe señalar la contradicción entre la defensa del orden social capitalista, que la Iglesia asume en tanto impugna sus consecuencias "indeseables" y no su lógica (su propia existencia como institución se halla ligada a la reproducción de dicho orden), y la profundización actual de condiciones (mercantilización del trabajador y exclusión social) que contradicen las concepciones paternalistas que la Iglesia asume, y la obligan a adoptar cierta actitud abstracta de cuestionamiento cercana a la de grupos "globalifóbicos", o la obligan a oponerse, en nombre de la paz, a las intervenciones armadas, como en los casos recientes de Afganistán e Irak.

América Latina

Una nueva movilización popular ha derribado a otro presidente latinoamericano. Esta vez se trata de Lucio Gutiérrez, que había asumido con el apoyo del movimiento indígena organizado. De esta forma, nuevamente un presidente que había aplicado las políticas del FMI y los organismos internacionales de crédito, sucumbió en el poder, esta vez, por la movilización de la clase media ecuatoriana y el nulo respaldo de las masas populares (en este caso indígena).

Por su parte, la visita de Condoleezza Rice por la región, aunque sólo sea por cuatro países, generó varias expectativas, encuentros y “encontronazos”. La abigarrada agenda que tuvo en esos días sirvió para evidenciar las dificultades que tiene EE.UU. en la aplicación de sus políticas en la región. Por un lado, ante el intento de reflotar el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) fue Brasil quién esquivó hablar sobre el tema,

aludiendo que, por el momento, no estaba en la agenda gubernamental. Ante el intento de impulsar a su candidato para la Organización de Estados Americanos (OEA), el candidato directo de EE.UU. ni siquiera pudo participar y el que quedó con el apoyo estadounidense (el mexicano Derbez) terminó bajándose a último momento luego de una polarización pocas veces vista y cuando se destinaba al fracaso. Por otro lado, ante la crítica al gobierno de Hugo Chávez, ningún país, con excepción de Colombia, salió a ratificar los dichos de Rice, optando entre el principio de no intervención sobre asuntos internos (Argentina) y el apoyo a Chávez (Chile y Brasil). Y por si esto fuera poco, hacia adentro del congreso norteamericano, la crítica hacia la política de Bush para la región crece de manera importante, generando tensiones al interior de la Casa Blanca.

Pelea por las ganancias

Entre el ALCA y la UE: las peleas en el MERCOSUR

La visita de Rice, entre varios temas (Ver *Coyuntura Política*) sirvió para que EE.UU. deje en claro que realizará nuevos intentos por retomar las negociaciones en torno al ALCA. Este acuerdo de libre comercio prevé la eliminación de las barreras nacionales para la libre circulación de mercancías, lo que es apoyado por el capital más concentrado de ese país. En su paso por Brasil, uno de los que más se opuso a los términos del acuerdo tal como estaba previsto, Rice afirmó que “*el libre comercio es uno de los motores más importantes del crecimiento*” (C 27/4), tomando como ejemplo el NAFTA y el CAFTA (los dos tratados que ya tiene firmado EE.UU., el primero con México y Canadá, el segundo con los países centroamericanos).

Si bien el MERCOSUR todavía no tiene una sólida política ante los distintos bloques conformados, sí hay una mirada en común en que el ALCA, tal cómo está en la actualidad, es inaceptable. Evitando entrar en conflictos, Lula afirmó que “*el ALCA está fuera de la agenda de su gobierno*” (C 27/4), lo que se evidenció en el documento final de los acuerdos entre ambos países, puesto que el tema no fue incluido. El canciller Amorim fue más lejos, al concluir que “*sin este bloque (por el MERCOSUR) Brasil pierde fuerza como líder regional*”.

Por su parte, tanto Argentina como Brasil no pudieron consensuar un representante para ocupar el cargo de secretario general en la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya que Argentina apoyó al candidato uruguayo, dejando al candidato brasileño sin posibilidades reales de asumir este cargo. De esta manera, a partir de estas diferencias, queda todo resuelto para que Pascal Lamy, una de las personas que llevó adelante las fracasadas negociaciones entre UE y MERCOSUR, y férreo defensor del proteccionismo del campo europeo, ocupe el cargo.

Esto no hace más que manifestar las diferencias políticas que se vienen sucediendo entre Argentina y Brasil. Es Argentina la que acusa a Brasil de ocupar todos los cargos posibles en todos los frentes que se van abriendo, tratando de hegemonizar e imponer las decisiones sin ningún tipo de consulta. Sin lugar a dudas, lo que está sucediendo no sólo es un problema de espacio político, sino también económico, ya que la primera economía sudamericana quiere imponer las reglas del juego, en defensa de sus intereses, intereses que responden – fundamentalmente – a los capitales más concentrados de este país. Y esto produce la reacción de los diferentes sectores de las burguesías sudamericanas, en primer lugar de la burguesía argentina.

Coyuntura Política

La gira de Rice evidenció los problemas políticos de EE.UU. en la región

A fines del mes pasado la secretaria de Estado norteamericano realizó una gira por cuatro países latinoameri-

canos: Brasil, Chile, Colombia y El Salvador. El objetivo era, en primer lugar, dar un signo desde Washington sobre el acercamiento de ese país a la región “olvidada”, tal como acusa la oposición demócrata por la guerra en Irak y la lucha contra el “terrorismo”. Estos países fue-

ron calificados como “aliados” imprescindibles en la región y Brasil fue mencionado por Rice como potencia “regional” que aspira a serlo a nivel “mundial”, siendo estos dichos un respaldo para el tan ansiado asiento permanente que busca Brasil si se produce la reforma en el seno del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Dicho sea de paso, recordemos que esta reforma –tal cual la plantea Brasil– enfrenta el rechazo de su socio más importante del MERCOSUR, Argentina.

Varios fueron los temas que se trataron. Al ya mencionado impulso por restablecer una nueva fecha de inicio del ALCA, se sumaron las preocupaciones por Venezuela, el papel de Brasil en la región, la candidatura de la OEA, el apoyo al Plan Colombia, entre otros.

El primero en desencadenar la seguidilla de acusaciones fue Roger Noriega, subsecretario de Estado quién acusó a Chávez de exportar su “fallido modelo” político a otros países: “Si los EE.UU. y los vecinos de Venezuela ignoran la cuestionable afinidad del presidente Chávez por los principios democráticos, muy pronto podríamos ver a una Venezuela más pobre, menos libre y sin esperanza, que busca exportar su fallido modelo a otros países de la región” (LN 17/4).

En su gira, Rice le sumó los siguientes comentarios: “Los líderes que son elegidos democráticamente tienen la obligación de gobernar democráticamente”, en franca alusión a Chávez (LN 26/4), para agregar que “tenemos nuestras dudas sobre el comportamiento del régimen venezolano en cuanto a su desarrollo doméstico, a su adhesión a la carta democrática de la OEA y en cuanto a sus relaciones con sus vecinos” (LN 27/4). De este modo, formuló una nueva política a seguir contra el país sudamericano, ya que es “imposible tener una relación pragmática”. El nuevo plan de la política norteamericana hacia Venezuela será el aumento de las presiones a los países vecinos para aislarla y el envío de ayuda económica para solventar a los grupos opositores al gobierno bolivariano.

Chávez, que a principios del mes pasado había formado el cuerpo de reservistas para funciones de Defensa y Seguridad y que cuenta con un millón y medio de personas (10 veces más que las Fuerzas Armadas Nacionales de ese país) respondió, en primer lugar, suprimiendo un programa militar conjunto entre ambos países que llevaba 35 años -expulsando, además, a los cuatro instructores norteamericanos- y, en segundo lugar, denunciando un plan de la CIA (Central de Inteligencia norteamericana) para derrocarlo y desestabilizar a Venezuela, sobre todo creando dificultades en la industria petrolera.

A su vez, Chávez volvió a visitar a Cuba por décima vez desde que es presidente, realizando nuevos acuerdos en materia energética, e impulsando el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) en contraposición al ALCA (Véase *Análisis de Coyuntura N° 56*).

Ante esta situación, Brasil intentó bajar el tono de la pelea, en su rol de líder regional, afirmando que los problemas de Venezuela los tiene que resolver el pueblo venezolano: “Existen problemas y deben ser discutidos por el pueblo venezolano, siempre respetando la soberanía de ese país” (C 27/4), afirmó Celso Amorim, el canciller brasileño. En tanto, el jefe de Gabinete Dirceu, ex guerrillero y con entrenamiento militar en Cuba, fue el que más tomó distancia de la posición norteamericana, al afirmar que “hay que recordar que también Venezuela pasó por un proceso político inédito recientemente, con un referéndum que confirmó a Chávez. Eso para Estados Unidos puede no ser suficiente, pero para nosotros sí lo es. Tenemos muchísimos puntos de convergencia con los Estados Unidos, pero no necesariamente convergemos en todo” (LN 29/4). Por su parte, Lula, en un intento de retomar el cauce entre ambos países, insistió en que “la guerra verbal tiene que bajar, tanto de parte de Venezuela como de los EE.UU.” (LN 29/4).

Pero ante el ofrecimiento brasileño de ser mediador entre ambos países, Rice afirmó que “no es preciso ninguna intermediación en el diálogo con los países latinoamericanos” (C 28/4), dejando en claro que si bien reconoce a Brasil como líder regional, es EE.UU. el que intenta hegemonizar las relaciones políticas en el continente, aunque ya sin el consenso que en otros tiempos tenía.

Otro de los temas centrales que abordó Rice en su paso por Sudamérica fue el agitado proceso de elección de un nuevo secretario general para la Organización de Estados Americanos (OEA). Veamos lo que sucedió.

Estados Unidos no logró imponer su voluntad en la OEA

Luego de siete meses sin Secretario General en la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza fue elegido por 31 votos contra 3. La acefalía del organismo viene después de que el ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, fuera obligado a renunciar al ser acusado de corrupción. Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario.

El amplio apoyo que obtuvo Insulza, como único candidato en esta instancia, no expresa el enmarañado proceso que significó el alineamiento de la mayoría de los países del continente al ex ministro del Interior chileno.

En un comienzo, los candidatos a dirigir la institución multilateral eran tres. Dos días antes de la elección, 11 de abril, renunció el candidato que impulsaba EEUU, el ex presidente de El Salvador Francisco Flores, hombre de derecha que gestionó en su país el apoyo a la invasión de Irak, incluso aprobando el envío de “voluntarios” a ese país, para acompañar la presencia de los marines. En los 56 años de la OEA, nunca un candidato de EEUU había perdido. Flores sólo contaba con el apoyo de su país, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana-

na y EE.UU., por lo que se encaminaba a ser un fracaso total. Rápidamente, el país del norte apostó sus fichas al secretario de Relaciones Exteriores de México: Luis Ernesto Derbez, un economista que trabajó 14 años en el Banco Mundial.

El nuevo entretejido de fuerzas que intentó construir EE.UU. utilizando presiones, ofrecimientos comerciales y financieros no alcanzó para que su candidato logre la mayoría simple (18 votos) y mucho menos el consenso deseado. El resultado se repitió en cinco vueltas de elección y fue de 17 votos para Derbez y 17 para Insulza. Pero más allá de los números, lo que aquí se expresa es la división entre dos proyectos. Por un lado los países cuyos gobiernos, siguiendo a Estados Unidos, apuntan a reproducir políticas neoliberales: Colombia, Perú, Belice, Honduras, Canadá, San Vicente, Granadinas, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Paraguay, St Kittsy Nevis. En todos éstos, sus cancilleres votaron a Derbez. Por el otro lado se encuentran los ejecutivos de países que han sido electos como repudio a las políticas que irradia Washington: Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Haití, más 10 de los 14 miembros de la Comunidad del Caribe, sufragaron por Insulza.

Ambos candidatos se encargaron de negar que la polarización del voto refleje polarización en el continente. Derbez concluyó: *"No hay división, lo que hay es un empate"* (LJdM 12/4). Empate que no hace otra cosa que reflejar la imposibilidad de EE.UU. de imponer de manera automática la línea a seguir por los países de América Latina y el Caribe.

Como ninguno de los candidatos logro la mayoría simple, 18 de los 34, los reglamentos de la OEA obligan a la suspensión del proceso, abriendo la contienda para que se sumen otros candidatos. Primero circuló la versión de que el canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros terciaría en la disputa, cosa que finalmente no ocurrió. Acercándose la nueva fecha del encuentro resolutivo, 2 de mayo, se barajaba la figura del Canciller de Canadá, Pierre Pettigrew. Finalmente Condoleezza Rice, con claras intenciones de cambiar posturas, no pudo imponer y termino negociando. Insulza, con claro apoyo de Argentina, había logrado que Paraguay y República Dominicana reviertan su voto. De esta manera Estados Unidos dio su último golpe de timón y alineó sus fuerzas detrás del chileno, a cambio de que se pronunciara por escrito condenando a Cuba y realizara una mención a lo negativo del proceso que está dando la Revolución Bolivariana. Fidel Castro –que junto a Chávez apoyaron desde un principio al chileno–, salieron a criticar muy duramente esta primera acción del nuevo Secretario General.

¿Que es la OEA?

En principio, este Organismo es el único foro político Norte-Sur del hemisferio. Los países miembros pueden negociar posiciones e intereses en igualdad jurídica, es decir, un país un voto. Desde la crisis de Malvinas de 1982, la OEA experimenta una decadencia presupuestaria. Como ejemplo, podemos observar que el año pasado recibió sólo U\$S 67 millones de los estados miembros, 12 millones menos de lo que precisa para su funcionamiento.

Lo superfluo de su papel político se evidencia en las crisis de régimen (tanto en Bolivia, Haití, y ahora en Ecuador) donde siempre es suplantada por "países amigos". Son muchos los que apuestan a que Miguel Insulza –otrora participe del gobierno de Salvador Allende–, a quien califican como excelente negociador y figura clave de la "política de los consensos" en Chile, pueda aplicar estas virtudes a nivel continental. Esta historia continuará y a partir de ahí se podrá saber si esta institución seguirá vigente como expresión Panamericana (lidiando entre los proyectos alternativos de Venezuela, las propuestas de líder regional de Brasil para el cono sur, etc.) o si se convertirá en un museo ubicado en el patio trasero de la Casa Blanca, lugar donde hoy sesiona, continuando con el descrédito que tiene en el conjunto de la población y en los dirigentes de primera línea.

Voto en contra de Cuba en la ONU: ¿quién fue el derrotado?

Las resoluciones de la ONU en torno a la situación de los Derechos Humanos en Cuba se transforman en una batalla política que mide la fuerza de Estados Unidos (impulsor de esta condena) a nivel mundial, ya que es su presión hacia los diferentes países lo que permite la aprobación de esta condena. La misma fue aprobada. Pero vayamos por partes, ya que hay varios síntomas por los cuales EE.UU. no puede festejar tranquilo.

En esta oportunidad, ningún país asumió el "desafío" de presentar la notificación sobre la situación de los derechos humanos en la isla, siendo el propio EE.UU. el encargado de hacerlo. Ese fue el primer signo de debilidad.

En segundo lugar, la resolución fue aprobada por 21 países -la mayoría europeos. Hubo 15 abstenciones -entre las que se encuentran la de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y República Dominicana- y 17 votos en contra -en su mayoría países africanos.

En tercer lugar, el texto tiene un contenido mucho leve que el que pretendía EE.UU., ya que sólo afirma que se condena a Cuba *"por no permitir la visita de un relator por supuestas violaciones a los Derechos Humanos"*. Este anuncio -totalmente *light*- permitió el apoyo de los países de la UE que patrocinaron la demanda presentada. Por

otra parte, el número de países que votaron a favor de la condena es uno menos que el año anterior, aumentando la cantidad de abstenciones. Segundo signo

Por último, Sudamérica voto unificada por la abstención, cosa que no había ocurrido en los últimos tiempos, a pesar de las presiones a varios países.

Por América Latina, cuatro fueron los países que apoyaron la votación en contra de Cuba: Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. Este último merece una mención aparte ya que el apoyo se decidió a último momento, al ceder México a la presión de EE.UU. a cambio del apoyo de este país a la candidatura de Derbez en la OEA (que finalmente fue retirada permitiendo la llegada de Insulza). En los largos años del PRI, que gobernó por más de 70 años, México siempre tuvo una política abstencionista, manteniendo un fuerte acercamiento con Cuba. Con la llegada de Fox al gobierno, este país cambió el voto llegando a romper relaciones diplomáticas con la isla.

Si bien la derrota de Cuba en la ONU fue real, el “triumfo” de EE.UU. debe estar siendo analizado por los artífices de la política exterior de Washington.

Por su parte, a través de su canciller, Felipe Pérez Roque, Cuba presentó una acusación a EE.UU., para que un cuerpo imparcial e independiente realice una inspección en la base norteamericana de Guantánamo, con el objetivo de saber de la situación de los detenidos en la lucha contra el “terrorismo” y en la guerra contra Irak. Estos presos se mantienen sin ningún tipo de asistencia legal, no tienen ningún tipo de defensa y se desconoce su situación jurídica.

Por su parte, Brasil se ofreció a ayudar en el “proceso democrático” en Cuba, tal como lo llamó Lula, pero primero derribando el bloqueo que ejerce EE.UU. sobre este país: *“Tenemos mucho que hacer por la democracia en Cuba: tenemos que ayudarla contra el bloqueo (...). Ayudar al pueblo cubano a vivir experiencias democráticas, esa ayuda no se puede establecer mediante imposiciones”* (C 10/4).

México: el “desaforado” López Obrador y las tensiones políticas

La batalla política que se produce en todo el continente, en este caso, se trasladó adentro de las fronteras mexicanas. En el mes de abril la política mexicana fue sacudida como hacía tiempo no pasaba. Todo comenzó cuando el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, centro-izquierda), fue acusado de *“abuso de poder”* por desacatar la orden de un juez de detener la construcción de una calle que comunicaba a un hospital, en un predio que se encuentra en disputa legal. A raíz de esta decisión del jefe distrital, la Procuraduría General (PGR) le abrió una causa en su contra que tuvo como consecuencia quitarle sus fueros

políticos. Pero esta situación, al parecer, tenía otro objetivo de mayor alcance: el desafuero permite abrir una causa judicial y, ante esta situación, según marca la ley mexicana, se le impediría la posibilidad de presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones del año 2006, que lo da como amplio favorito en las encuestas. Esta situación desató una campaña en contra del gobierno de Fox por parte del propio López Obrador, llamando a la *“resistencia civil y pacífica”*, y convocando a una movilización de 150.000 personas frente el Congreso Nacional el día en que se votaba el desafuero y la automática destitución, pedidos por la PGR.

Este enfrentamiento entre el PRD y el gobierno de Fox se viene desarrollando abiertamente desde hace alrededor de un año. Si bien el PRD siempre fue opositor –no sólo al gobernante Partido de Acción Nacional (PAN) sino también al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante siete décadas– a mediados del año anterior empezó a ser el portavoz de los sectores sociales que se oponen al gobierno de signo neoliberal de Fox, con chances reales de acceder al poder. En septiembre del año pasado, una movilización de 500.000 personas en el Distrito Federal tuvo a López Obrador como la figura política que condensó esa inmensa protesta social que hacía mucho tiempo que en México no se expresaba abiertamente. Incluso, presentó abiertamente un conjunto de medidas políticas (*20 postulados básicos para un proyecto alternativo de nación*)³ que México debería tomar para cambiar el rumbo de sus alineamientos políticos y económicos. Entre algunas de ellas figuraban una búsqueda de alianzas políticas con los países que le pusieron palos en la rueda al ALCA: Venezuela, Brasil, Argentina, claro está que cada uno a su forma y con distintos intereses. Además, proponía un realce del nacionalismo mexicano frente a EE.UU. en la cuestión de los territorios de frontera y los inmigrantes ilegales. A partir de allí, López Obrador se perfiló como el principal opositor a Fox y su figura en las encuestas ya lo dan como ganador en las próximas presidenciales de hacerse hoy día las elecciones.

Marcha atrás

El desprestigio del gobierno nacional creció día a día en el mes de abril por la decisión tomada por la PGR de sacarle los fueros a López Obrador e impedirle –tal como dicen los estatutos de ese país– ser candidato a presidente. Incluso, el presidente Vicente Fox tuvo que salir a aclarar la cuestión, a través de su canciller Luis Derbez, ante sus pares de otros países, preocupados por la inestabilidad política creada a partir del proceso judicial creado contra López Obrador, declarando que éste

³ Ver *Análisis* de octubre 2004, sección *Coyuntura política*, donde presentamos las tendencias contra-hegemónicas de América Latina e incluimos esta acción de López Obrador.

fue “víctima del burocratismo”. Así las cosas, el gobierno empezó a intervenir para que la fiscalía y la PGR revean la medida. El propio Fox tuvo que interceder y anunció por esos días “*la renuncia del Fiscal General y la revisión ‘exhaustiva’ del caso del alcalde capitalino*” (ANSA 1/05). Además, el primer mandatario tuvo que acceder a una entrevista con el propio López Obrador como gesto de conciliación y de garantía de estabilidad política, “*luego de mantener una guerra verbal en los últimos meses que generó fuertes presiones en los mercados financieros*” (ANSA 3/5).

La marcha atrás definitiva vino en vísperas del encuentro de los dos líderes políticos, haciendo levantar definitivamente los cargos que se le imputaban a López Obrador. “*El presidente Vicente Fox y el ministro de Gobernación, Santiago Creel, convocaron hoy a la unidad y al fin de las confrontaciones, en la víspera de la reunión entre el mandatario y el alcalde de la capital, Andrés López Obrador. El pronunciamiento se produjo poco antes de que la cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD), principal referente de la izquierda mexicana, se reuniera con Creel, para allanar el diálogo entre Fox y López Obrador. Creel dijo que el gobierno federal está dando vuelta la hoja de la confrontación con el PRD, para tratar de escribir sobre una hoja en blanco nuevos acuerdos en beneficio del país. En la misma ceremonia, el presidente Fox llamó a los*

mexicanos a ‘la unidad nacional, a unir fuerzas para consolidar un México democrático y plural, justo e incluyente’”. Luego de que la fiscalía se expidió levantando los cargos, López Obrador declaró que el caso, al no existir demandas, “*está cerrado*”, no teniendo así trabas para su candidatura presidencial. En relación con esto último, allegados al mandatario del Distrito Federal comentaron que, luego de la reunión con Fox, éste dará a conocer su futuro político, pero se prevé que en julio renuncie al cargo para dedicarse de lleno a la campaña presidencial (ANSA 5/05).

Parece más debilidad que fortaleza el hecho que Fox tenga que haber cedido ante la presión popular y política, al levantar los cargos contra su principal contrincante. Esta situación inició, aparentemente, la futura transición del gobierno de Fox a manos del PRD, quien ha sabido aglutinar a los sectores sociales opositores y descontentos con el gobierno del PAN, cuestión que no puede dejar de ser tenida en cuenta, porque alterará el mapa de las relaciones políticas en América Latina y en uno de los países con más influencia de los Estados Unidos, que seguramente no se quedará con los brazos cruzados.

Conflicto Social

Ecuador: la movilización social pide “que se vayan todos”

Los hechos y el componente social de los “forajidos”.

La profunda crisis que atraviesa Ecuador es resultado de un proceso de corrosión de las instituciones de gobierno. En los últimos 10 años, estas instancias legislativas, ejecutivas y judiciales se fueron escindiendo cada vez más de las necesidades de la población andina, que si bien tiene una economía que crece a un 6% anual, detenta un 65% de su población bajo la línea de pobreza.

En la coyuntura actual, la destitución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte del Presidente Lucio Gutiérrez, acompañada de la declaración del Estado de Emergencia en Quito y Pichincha –que es la limitación de los derechos Civiles, disponiendo de la fuerza pública, bajo el mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para controlar y mantener el orden público– actuó como catalizador de las protestas que se venían produciendo desde diciembre pasado, cuando la mayoría oficialista en el Poder Legislativo Unicameral destituyó a la CSJ y la reemplazó por otra afin al Gobierno.

La acción jurídica de esta nueva Corte, de 31 miembros, se orientó a satisfacer las necesidades del presidente, construyendo una alianza política con otros partidos. El año pasado, Gutiérrez no pudo reactivar un acuerdo

con el FMI por no contar con apoyo político. Para salir de esta soledad y recibir el respaldo del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), la CSJ anuló en marzo todos los juicios por malversación de fondos contra Abdalá Bucaram –presidente por el PRE entre los años 1996 y 1997–, a quien se recuerda por el hecho de haber huído con bolsas de residuos llenas de dinero del Banco de Reserva. Otro beneficiado fue el ex presidente Gustavo Novoa, magnate Bananero y su vice Alberto Dahik, acusados ambos de corrupción en sus mandatos (2000-2003). Los tres volvieron al país libres de culpa y cargo y pusieron sus diputados a disposición de Gutiérrez. El uso de las instituciones del Estado para canalizar intereses particulares generó la movilización de sectores sociales descontentos con esta forma de hacer política, derivado en un profundo repudio a la clase política ecuatoriana.

“*Son unos forajidos de clase media*” (19/4 C), trino Gutiérrez, dándole identidad a los grupos que, autoconvocados en las barriadas de Quito y Pichincha, desafiaban el Estado de Sitio y repudiaban a la mayoría de los ejecutores de las políticas socio-económicas implementadas en los últimos años. Los manifestantes –en su mayoría estudiantes, sectores medios y acomodados e incluso ancianos– avanzaron contra la sede presidencial quebrando dos anillos de seguridad, en una verdadera batalla campal que costó la vida de tres personas, entre ellas la del fotoperiodista chileno que formó parte del go-

bierno de Unidad Popular de Salvador Allende, Augusto García Moreno. La furia de estos sectores, con las necesidades básicas satisfechas, pero en franca decadencia, se concentra en el reclamo de renovación y/o superación de las instituciones ecuatorianas.

Los indígenas, que representan el 40% de la población del país, agrupados en la poderosa Confederación de Naciones Indígenas (Conaie) se mantuvo al margen de las protestas. Sin embargo, su presidente Luis Macas saludó *“la heroica lucha del pueblo de Quito”* (LJdM 18/4), anunciando la participación de los pueblos originarios, hecho que nunca ocurrió. Sí se movilizó la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine), que actuó como fuerza de choque contra los “forajidos”

La sociedad ecuatoriana: récord en la caída de presidentes.

Luego del inefable Abdalá Bucaram, que tras seis meses de gobierno fue echado en el '96 por “incapacidad mental”, Fabricio Alarcón Rivera –presidente interino entre 1997 y 1998– llamó a elecciones, resultando electo Jamil Mahuad. Éste, en su corto mandato que se extendió desde 1998 hasta 2000, dolarizó la economía, aconsejado por Domingo Cavallo, quien antes había asesorado a Bucaram y luego a los ejecutivos siguientes hasta plasmar el *ad alid* monetario. Éste régimen económico es el que hoy impera en Ecuador.

Mahuad sufrió un levantamiento de los indígenas (CONAIE) y militares, liderado por Gutiérrez, que lo desplazó del poder. El Congreso designó a Gustavo Novoa Bejarano (2000-2003), el cual llamó a elecciones de las que resultó electo, con el 54,3% de los votos, el propio Lucio Gutiérrez, prometiendo combatir la corrupción y asegurando independencia a la CSJ. Rápidamente, este mandatario se alineó con el FMI y siguió con la dolarización y el ajuste. La CONAIE, constituida en el partido Pachacutic, le sacó su apoyo y retiró los funcionarios del gabinete que hasta ese momento gobernaban con Gutiérrez. La desesperación por constituir fuerza llevó a Gutiérrez a manipular, en diciembre último, la CSJ.

El Congreso, reunido en secreto, anuló el decreto presidencial que destituía a la Corte y la “Pasó a retiro” con el voto de 89 legisladores de 100. No logrando tranquilizar a la población y temerosos de caer ellos también, fueron por más y, reunidos fuera del Congreso, destituyeron al mandatario con 62 votos de 67 presentes.

Golpes de timón en un mar de tempestades.

La preocupación de EEUU en referencia a estos sucesos se expresó en la voz del director de la CIA, Porter Goss: *“América Latina representa hoy un potencial foco de inestabilidad que puede amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos”* (LN 21/4).

A los hechos descriptos hasta aquí le siguió el nombramiento como jefe de Estado de Alfredo Palacio, vicepresidente de Gutiérrez, quien desde los primeros días del anterior gobierno sorprendió con serias críticas, que se focalizaban en el pedido de orientar los fondos estatales para pagar la “deuda social” y solventar programas de sanidad gratuita.

El nombramiento del nuevo gabinete tiene a Mauricio Gándara –reconocido por sus posiciones contrarias a EE.UU. y al Plan Colombia– como ministro del Interior y a Rafael Correa –calificado por sectores industriales y productivos de “terrorista económico” por sus posiciones críticas a la dolarización y al pago de la deuda– como Ministro de Economía. A este giro ideológico se suma el descabezamiento de la cúpula militar y de la jefatura de policía.

El problema principal que enfrenta Palacio es que a nadie se le escapa que el recambio institucional está viciado de precariedades. Al nuevo gobierno le toca explicar cómo destituyeron a Gutiérrez por “abandono de cargo”, cuando este estaba presente en la sede presidencial. Esto además lo hizo una minoría insuficiente de diputados: 60, cuando la Carta Magna refiere que esto sólo lo pueden hacer dos tercios del Parlamento Unicameral, es decir, 67 de los 100.

Mientras ningún país había reconocido a las nuevas autoridades, éstas endurecían su proyecto, anunciando que reexaminarían un convenio que permite que EE.UU. mantenga una base en Manta⁴, que no concederían inmunidad a los soldados de ese país y quitarían el apoyo al Plan Colombia. Además, se revisarían las condiciones en que se está negociando el Tratado de Libre Comercio –junto a Colombia y Perú– que sólo será firmado si se cumple la “igualdad de condiciones”. Correa sintetiza las intenciones de estos cambios: *“No va a ser más como antes que se pagaba por anticipado la deuda externa y se retrasaban dos meses los salarios. (...) Nosotros somos el único país del mundo que compromete los ingresos petroleros anticipadamente para recortar deuda”* (25/4 LN). Ecuador, con una deuda de US\$ 11.000 millones, compromete el 40% de su presupuesto anual en este pago.

Mientras los “forajidos” escucharon con mucho escepticismo estos dichos, en una nueva marcha de presión al Parlamento lograron que sean echados de sus bancas 11 diputados.

El respiro para Palacio llegó con el reconocimiento formal de su gobierno por la Unión Europea y otro táctico de EE.UU. Acto seguido, Palacios moderó su discurso y dijo que respetará los tratados internacionales –incluyendo Manta– y apostará al logro del TLC.

⁴ En 1999 el gobierno de Jamil Mahuad permitió la militarización de la ciudad portuaria de Manta, espacio que se considera fundamental para el Plan Colombia.

Argentina

El apresurado festejo por el abandono del default fue rápidamente aguado por los centros mundiales del capital financiero y los gobiernos del Grupo de los 7 quienes exigieron al gobierno de Néstor Kirchner una nueva reestructuración favorable a los bonistas que rechazaron la propuesta argentina. Al mismo tiempo, durante todo el mes se mantuvo trabado el desenlace del canje gracias al embargo “en suspenso” que un juzgado de Nueva York ejecutó sobre 7.000 millones de dólares de una cuenta nacional en un banco de EE.UU. Mientras tanto, comienzan a definirse las pautas para un acuerdo mínimo con el Fondo Monetario, instancia que renueva los reclamos por reformas estructurales. Así, a nivel interno

la más concentrada burguesía local exige el protagonismo de un Estado protector frente a los capitales más concentrados foráneos, y una agitada clase obrera reclama aumentos salariales.

En lo que respecta a la coyuntura política, analizaremos lo sucedido durante el mes de abril en la interna del justicialismo, ya enmarcada definitivamente dentro de la idea del presidente Kirchner de “plebiscitar” su mandato en las elecciones legislativas de octubre.

Por otro lado, echaremos una mirada a los conflictos salariales que se vienen sucediendo, los cuales desbordan la estructura tradicional de la CGT.

Pelea por las ganancias

Frente externo: de deudas impagas, reformas fiscales, bancarias y “otros asuntos”...

La reestructuración de la deuda con los acreedores privados, como hemos dicho en anteriores ediciones, expresó el interés de la burguesía local, tanto la de capital más concentrado como la de los medianos y pequeños propietarios. En esa instancia particular el capital local actuó de manera *coligada*, puesto que su reproducción requirió y requiere de una disminución de la transferencia hacia los acreedores de la riqueza social producida en el país. Los pagos proyectados a partir de las altísimas tasas de interés incluidas en los préstamos tomados por el Estado (y también por las empresas) fundamentalmente a partir de mediados de la década del noventa⁵, significaban para la burguesía local la imposibilidad de que ese Estado les garantice las necesarias subvenciones, descuentos y/o exenciones fiscales, inversiones “sin beneficio capitalista” en infraestructura, y el mantenimiento de la paz social mediante la entrega de planes sociales y asistencialismo. Así, luego de tres redondos años de durísimas negociaciones se dio inicio a un histórico “megacanje” de una parte de las deudas estatales que supuso un recorte del 65% en el capital adeudado, una extensión en los plazos de pago y una reducción en la tasa de interés. Claro que dicho recorte se ejecutó sobre los más débiles y dispersos acreedores privados, poseedores antes de la quita de títulos de deuda argentina por 82.000 millones de dólares; dejando indemne a la deuda con los organismos multilaterales de crédito (FMI, BM y BID) y otros centros acreedores como el Club de París.

Con todo, el necesario reconocimiento a escala mundial del *canje* de deuda por parte de los centros financieros y del Grupo de los 7 (países más poderoso del mundo) no llegó en los términos esperados por el gobierno ni por la burguesía local. No llegó, digamos, hasta ahora.

Así, el mes pasado continuaron las presiones y las acciones tendientes a trabar la reestructuración oficial “en curso”, mientras comenzaron a discutirse los términos de un acuerdo mínimo con el Fondo Monetario, con el objeto de refinanciar los próximos vencimientos con los organismos de crédito, sin contar con el ingreso de dinero fresco.

Mientras tanto, en el primer trimestre del año el gobierno argentino pagó a los organismos 1.450 millones de dólares (C 22/4); siendo en los nueve meses venideros los vencimientos, por 10.618 millones de dólares (C 18/4).

Hemos visto en el *Análisis...* anterior que el canje de la deuda no pudo ejecutarse luego de que el juzgado de Nueva York, en manos del juez Thomas Griesa inmovilizara, a pedido de un fondo acreedor, 7.000 millones de dólares en bonos que habían ingresado a la cuenta de la Argentina en el Bank of New York para ser cambiados por los nuevos títulos (con descuento). A dicho fondo, denominado “buitre” –porque apuestan a títulos de deuda que se declaran en default–, el mes pasado se le han sumado otros dos que exigen a la Argentina, en tribunales internacionales, el pago de 115 millones de dólares (C 13/4).

El contexto general estuvo dominado por la presión retórica de los centros financieros y los gobiernos de los países más poderosos del mundo contra la maniobra nacional. El “caballito de batalla” de todos ellos fue negar a la Argentina como país fuera de la cesación de pagos, hasta tanto no se incluya en los futuros pagos a ese 24% de acreedores privados que impugnó el canje.

⁵ Como resultado del cierre del proceso de privatizaciones y luego, a partir de 1998, con el inicio formal de la recesión.

Así, en el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, realizada a mediados de abril en Japón, se hicieron oír idénticos reclamos monotemáticos. Principalmente el director del FMI, Rodrigo Rato, sostuvo: *“La normalización de Argentina requiere una estrategia por parte de las autoridades, que son las que deben fijarla, una estrategia posible respecto a la parte de la deuda que no ha sido reestructurada”* (C 7/4). Pocos días después el vocero del Fondo, Thomas Dawson, subió el tono de la presión condicionando la firma de un acuerdo con la Argentina al desarrollo de *“una estrategia realista para tratar con los acreedores que no participaron” del canje* (C 9/4).

Jugando de local, el ministro de Finanzas japonés, Sadakazu Tanigaki, acusó: *“Argentina no negoció de buena fe. Japón lo pidió en el Grupo de los Siete. Pero el canje se resolvió sin tomar en cuenta a los acreedores”* (C 11/4). De la misma manera, el director que representa a Italia dentro del FMI, Pier Carlo Padoan, advirtió que *“Si Argentina no reabre una negociación de buena fe con sus acreedores, el Fondo no podrá reanudar los préstamos al Gobierno”* (C 14/4).

Semejante hostilidad fue expresada por la línea más dura del Fondo que pretende aplicar a la Argentina la cláusula para “países en Suspensión de Pagos”; adhieren a esta posición Inglaterra, Japón, Italia, Canadá y Holanda. Así, el presidente Néstor Kirchner viajó velozmente hacia Alemania, país junto con EE.UU. más proclive a aceptar la concreción de un acuerdo mínimo inmediato.

Por su parte, en la mencionada Asamblea anual del BID Lavagna defendió la postura oficial, aunque aplicando un matiz a favor de una posible inclusión de todos los bonistas “a su debido momento”: *“Por si alguien no lo percibió, 76 por ciento es más grande que 14 por ciento. La Argentina debe terminar la reestructuración que empezó [...] No hay reestructuración con 100% de aceptación. Siempre que algo queda en default y se trata a su debido momento por otros canales”* (LN 11/4). El propio presidente Kirchner se despachó de igual manera, aunque con mayor grado de intransigencia, desde Berlín: *“Logramos el 76% de adhesión al canje. No vamos a abrirlo. Dimos nuestra palabra. Finalmente, el 76% nos creyó y nuestra palabra va a ser inalterable”* (LN 14/4). La frase de Kirchner se condice en términos estrictamente legales con la denominada “ley cerrojo”, sancionada por el Congreso argentino con el objeto de cancelar toda posibilidad de apertura del canje para quienes lo rechazaran en primera instancia.

Lejos de apaciguar la descarga retórica, el mismo día y de manera casi conjunta el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Tesoro de EE.UU. y la Unión Europea salieron a reclamar en respuesta a las respuestas. En el marco de los preparativos para la asamblea de primavera del BM y el FMI, desde esta última entidad Rodrigo Rato retomó los argumentos ya citados: *“Argentina debe*

tener un enfoque realista sobre la deuda, que tome en cuenta que existe una deuda bastante grande que no ha sido reestructurada” (C 15/4). Pero desde las otras tribunas los reclamos hacia el país trascendieron la problemática específica de la deuda en default para pasar a juzgar las políticas económicas fundamentales del gobierno. De esta manera, el titular del BM, John Wolfensohn, afirmó: *“Estaremos dispuestos a trabajar con Argentina, en temas sociales, de servicios públicos y de inversión cuando sepamos cuáles son las reglas de juego y los acuerdos”*. Simultáneamente, el subsecretario del Tesoro norteamericano, John Taylor, recurría sobre el mismo aspecto subrayando que el problema de un sector de bonistas “rebeldes” es sólo una parte del “problema” argentino a reformar: *“hay un número de temas más amplio que el país debe estudiar con el FMI si hay un programa nuevo. Y son temas estructurales que tienen que ver con la política fiscal, bancaria y otros asuntos”* (C 15/4). Sin dar respiro, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea también avanzó sobre las reformas estructurales, condición necesaria para el acuerdo con el Fondo. Para la UE, éste *“también debería tener fuertes condicionalidades, en particular en lo concerniente a las metas fiscales primarias y las medidas estructurales, y una estrategia clara de salida”* (LN 17/4).

Finalmente, la banca más concentrada a nivel mundial, nucleada en el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), cargó las tintas contra el carácter *“populista”* del gobierno, en términos generales, identificándolo con la Venezuela de Chávez. El IIF advirtió que ambos países *“están intensificando su uso de controles directos sobre la economía [para] lograr sus objetivos políticos populistas”*; citando por ejemplo el *“rechazo”* a los ajustes de tarifas y el *“reciente ataque”* a inversores extranjeros, como aconteció en el caso Shell (LN 10/4).

Como hemos visto, mientras los centros financieros más poderosos del mundo intentan limitar, militantemente, las medidas económicas clave que el gobierno “va aplicando”, la burguesía local que requiere de un Estado “protector”, apoya al gobierno en materia de negociaciones externas pero, puertas adentro, reclama un marco jurídico claro, favorable a la reproducción de sus negocios.

Subvenciones, protección y apoyo político.
Las demandas de la burguesía local.

El caso testigo de Loma Negra.

El presidente de Arcor, Luis Pagani, en la piel de director de la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA), advirtió al ministro Roberto Lavagna que *“la inversión depende fuertemente de la previsibilidad y la estabilidad de las reglas de juego de la economía y de ciertos insumos críticos sin los cuales resulta difícil planificar y pensar en proyectos futuros”*. En concreto Pagani pidió *“una paulatina reducción de las alícuotas de impuestos que afectan a la producción y las exporta-*

ciones". El flujo de capitales necesario para que una economía capitalista marche, en la ecuación de Pagani y de la burguesía de capital más concentrado con intereses en el país, dependerá de las mejores condiciones que el gobierno les garantice para la reproducción de los negocios. Hemos visto en *Análisis... pasados*⁶ que la batalla por la reducción y abolición de las retenciones ha unido a todos los nucleamientos del campo (grandes y chicos), a la industria alimentaria, a las petroleras y a la banca privada local y extranjera por un lado. Del otro, una fracción de la Unión Industrial, organizada en torno a la poderosa organización Techint y acompañada por la mediana burguesía y las cooperativas del agro lograron mantener, hasta ahora, la política de retenciones, gracias a la cual reciben un subsidio a la producción, vital para sostenerse en el mercado mundial.

Pero más allá de esta disputa que puede polarizar de manera más o menos clara a dos facciones del capital, el mes pasado en un marco de inflación creciente, de tensión con los centros del capital financiero mundial (como hemos visto más arriba), con las compañías privatizadas que exigen libertad de movimiento y ajuste tarifario, y con empresas como Shell y Esso que debieron soportar un boicot gubernamental cuando aumentaron los precios de sus productos, todas las fracciones del capital salieron a reclamar "seguridad jurídica", "previsibilidad" y "protección" al gobierno.

Hemos citado a Luis Pagani quien en su demanda de "previsibilidad" (como condición para el ingreso de inversiones) criticó a "grupos organizados" que operaron contra la suba de precios.

Al mismo tiempo, el nuevo titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, manifestó su preocupación en una reunión a "puertas cerradas": "mientras discutimos salvaguardas, Brasil compra nuestras debilitadas empresas". Otro dirigente industrial, y artífice de la devaluación, Ignacio De Mendiguren, planteó de manera transparente: "En Brasil todo es a favor del empresario local. Tienen crédito barato, desgravaciones impositivas y el apoyo político del propio gobierno" (C 22/4). El contenido de los reclamos fue claro como el agua: créditos flexibles y baratos, exenciones impositivas, salvaguardas comerciales y apoyo político contra los trabajadores que demandan aumentos de salario. Cabría preguntarse por qué la recurrente referencia al país vecino en las intervenciones de los hombres de la UIA.

En medio de ese diálogo desapacible entre los dirigentes gremiales del capital y el gobierno se avanzó en la compra de la empresa Loma Negra por parte de la brasileña Camargo Correa. La venta de la empresa vinculada al apellido Fortabat, que controla el 48% del

mercado de cemento a nivel nacional, fue utilizada por la burguesía local como caso testigo de la "nueva" extranjerización de la producción nacional. Nadie tardó en asociar lo obvio: el avance del gran capital brasileño sobre poderosas empresas de capital local: Pecom fue comprada por Petrobrás en julio de 2002; Quilmes lo fue por Brahma, unos meses después; Belgo Mineira controla a la "nacional" Acindar.

El uso retórico de la venta de Loma Negra demuestra, no obstante, la incompatibilidad de las burguesías de ambos países a la hora de pensar una estrategia común en el espacio sudamericano para todas las fracciones del capital.

La unidad contra los reclamos salariales.

El mes de marzo marcó un aumento en el costo de vida del orden del 1,5%, lo que significó para el primer trimestre una inflación del 4% (C 6/4). Proyectada de manera mecánica, la tendencia al alza echa por tierra las previsiones realizadas por el gobierno para el año en curso en lo que a índices de precios internos refiere. Pero los guarismos empeoran si consideramos que el aumento fue bastante mayor para los sectores con menores ingresos: la canasta básica de alimentos aumentó en marzo un 2,99%. Así, el salario y todos los ingresos fijos (como por ejemplo los subsidios a desocupados) perdieron una sustancial capacidad de compra.

Los niveles cada vez más altos de precios contribuyeron, junto con una disminución, aunque mínima, de la desocupación, a profundizar en algunas ramas una política de reclamos salariales por parte de trabajadores docentes, de hospitales, bancarios, y casi todos en contra de la propia dirección sindical formal.

Con todo, ante la extensión de la conflictividad social, todo el arco de la burguesía con intereses en el país, alegando "estabilidad" y "seguridad jurídica" –como hemos visto–, salió a oponerse sin vacilaciones a todo proyecto de aumento salarial.

Daniel Funes de Rioja, abogado de la UIA, amenazó con que "si no hay moderación en las demandas salariales, la conflictividad crecerá y pondrá en riesgo la inversión" (C 14/4). Al mismo tiempo, el presidente de Daimler Chrysler, Manfred Muell, sentenció de manera categórica que los reclamos del sindicato de mecánicos, Smata, "no son razonables" (C 22/4) y agregó: "parece que algunos sindicalistas viven en otro país y no en la Argentina de 2005" (LN 22/4).

El temor del capital se explica ante la agitación del conflicto cuyo desarrollo desborda los canales de las instancias institucionales sindicales. El gobierno –o una parte de éste– mediante la aplicación de ajustes salariales por decreto, los llamados a boicot, las amenazas sobre la aplicación de controles de precios o aumentos a las retenciones, no prestó el "apoyo político" suficiente a

⁶ Se ha analizado esta confrontación en los *Análisis de Coyuntura* números 57 y 58

los empresarios, que exigía De Mendiguren, según citamos más arriba.

Por caso, el mes pasado el gobierno dispuso una medida que permitió a las compañías petroleras importar gasoil sin impuestos; la contraparte inevitable obliga a las empresas a vender el combustible a los precios vigentes antes del 28 de febrero. Así, los ajustes aplicados por Shell y Esso en naftas y gasoil fueron revocados por las propias firmas. En otro frente, la Secretaría de Agricultura advirtió a los frigoríficos que en caso de no bajar los precios de determinados cortes, según lo acordado

en marzo, haría públicos los nombres de quienes violaran el acuerdo. Pero además de continuar con la política del boicot, trascendió desde el gobierno que se estudia subir las retenciones a las exportaciones de carne en función de equilibrar el precio interno.

Desde las empresas cancelan toda posibilidad de redistribución del ingreso vía aumento salarial, deseosas de obtener del gobierno salvaguardas, subsidios, exenciones impositivas y la capacidad de aumentar los precios de sus productos de la manera más discrecional posible.

Coyuntura política

Lucha de intereses en la interna del PJ

En el terreno político, en tanto, la disputa mayor continúa girando en torno a la interna del justicialismo, y todo indica que lo seguirá haciendo al menos hasta las elecciones legislativas de octubre próximo. En ese sentido, cada vez parece más claro, y así lo manifiestan los protagonistas de la disputa política, que se trata de lucha de intereses, lo que nos permite observar con mayor claridad a los bandos en contienda.

La disputa electoral está encuadrada dentro de los marcos planteados por el propio presidente, Néstor Kirchner, en cuanto a que en los comicios de octubre será plebiscitado su mandato. Así lo señalaba el primer mandatario: *"Algunos no quieren que digamos que el Gobierno plebiscita en octubre, pero la verdad es que si la gente dice que sí, vamos para adelante con todo. Si no, otra será la historia"* (C 20/4). Dos semanas después, también en boca de Kirchner, resurgía el mismo planteo, esta vez presionando a los legisladores del propio bloque de su partido: *"Necesito que me acompañen en el Congreso. Necesito diputados que me acompañen, no que me condicionen (...). Hay momentos en la vida de un país que son definitorios. Si el pueblo argentino en octubre dice 'Sí, lo acompañamos', vamos a poder seguir avanzando"* (LN 4/5).

Dentro de ese marco, entonces, analicemos cómo se desarrolló durante abril la interna justicialista, y la disputa por los espacios en las listas de legisladores a votarse en octubre, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

El día 6, el presidente firmó el decreto reglamentando la ley de internas abiertas, obligatorias y simultáneas, a realizarse entre el 5 de junio y el 14 de agosto próximos.

La disputa en torno a esto comenzó ni bien firmado el decreto. Desde el duhaldismo se apunta a que dichas elecciones se realicen lo antes posible, considerando que el transcurrir de los días y la cercanía de las elecciones de octubre perjudican su posibilidad de salir mejor parado en las internas. Inclusive desde este sector se realizó una presentación en el juzgado electoral platense, *"para que el gobernador Felipe Solá sea intimado a convocar las*

elecciones partidarias en la provincia en término perentorio. El comicio, según el recurso interpuesto, debería realizarse entre el 23 abril y el 23 de junio" (C 21/4).

Pero volviendo a principios de abril, el mismo día en que Kirchner reglamentaba por decreto el llamado a internas abiertas, el kirchnerismo daba a conocer su decisión de lanzar a Cristina Fernández, esposa del presidente, como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Lo que aún no está definido es si lo hará por dentro del justicialismo, compitiendo en internas con la candidata del duhaldismo, "Chiche" de Duhalde, esposa del ex presidente, o lo hará por fuera con una lista propia, evitando la áspera disputa en una interna con el sector que controla el mayor aparato político del país, es decir, el aparato justicialista bonaerense, conducido por Eduardo Duhalde. La razón por la cual aún está en discusión esto es que si bien el duhaldismo controla en forma mayoritaria dicho aparato, las encuestas le dan a Cristina Fernández más del 60% de intención de voto, contra un 25% de "Chiche" Duhalde en los distritos en los que mejor mide.

Ya sea por fuera o por dentro del PJ, la decisión de enfrentarse al duhaldismo estaría tomada. Al menos así lo hizo saber el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, quien trata de nacionalizar la interna provincial que tiene con Duhalde, pegándose cada vez más al presidente Kirchner. El propio Solá señalaba: *"Ya no hay nada que hablar con Duhalde. Vamos a competir con el duhaldismo por afuera o por adentro"* (LN 10/4).

Del otro lado, la respuesta llegó en un acto en La Matanza organizado por la corriente Lealtad, en el que "Chiche" Duhalde intentó en su discurso atacar a Solá y al kirchnerista dirigente de la FTV, Luis D'Elía, salvaguardando la relación con el presidente Kirchner, a sabiendas de que no es un buen momento para romper la alianza con el kirchnerismo cuando éste goza de gran aceptación en la población. *"El pueblo no quiere ver a los dirigentes peleando"*, señaló "Chiche" Duhalde (LN 10/4).

Sin embargo, la realización de continuos actos conjuntos entre Solá y Kirchner en diversos partidos del

Gran Buenos Aires hace difícil tal separación. Y la disputa, como lo señaló la propia Cristina Fernández en el acto de lanzamiento no oficial de su candidatura, realizado en la Capital hacia fines de abril, tiende a hacer cada vez más evidente qué hay detrás de esta interna: “*La política no es una cuestión de buenos y malos –dijo Cristina Fernández–. La política es lucha de intereses*” (LN 28/4).

Y en el resto del país... también

Mientras tanto, si bien la interna bonaerense opaca, por ahora, las campañas en el interior del país, el escenario se repite, aunque toma diversas formas, inclusive saliendo más visiblemente de los marcos del justicialismo.

Un ejemplo de ello lo tenemos en Tierra del Fuego, donde el gobernador Jorge Colazo, militante de la UCR, había emitido una solicitada de apoyo y agradecimiento a la gestión de Kirchner como presidente. El día 12 de abril, Colazo ratificó su postura aun previendo las sanciones que le aplicaría su partido. Al ser consultado sobre cómo es su relación con Kirchner, el gobernador fueguino señalaba: “*De agradecimiento, porque es lo que yo palpo en la calle. Acá hay dos deudas: la externa y la interna. Yo pagaría una parte de la primera, pero me ocuparía de la segunda. Y el Presidente lo está haciendo. En Tierra del Fuego, ha hecho obras por más de 400 millones de pesos, sin pedirme nada a cambio*” (LN 13/4).

Tanto la solicitada como su defensa posterior llevarían a la UCR a intervenir el partido en dicha provincia y suspender la afiliación del gobernador. Por un lado, esto muestra el reacomodamiento de fuerzas que se está produciendo en el plano político, a la vez que expresa la decadencia del partido radical, quien no logra recomponerse de la crisis desatada en 2001 que terminó con la huida de la Casa de Gobierno del entonces presidente Fernando De La Rúa. Lejos de recomponerse, ya a comienzos de mayo se realizó un congreso partidario en Córdoba en el que se planteó el “caso Colazo”, el cual terminó al borde del escándalo (LN 7/5).

El segundo ejemplo que nos dejó el mes de abril es el de La Rioja, provincia en la cual el actual gobernador, Ángel Maza, devenido kirchnerista, analiza no participar en la interna del PJ para evitar competir contra el aparato menemista, dándole impulso a su propio espacio “Primero la gente”, y competir desde allí en octubre en las elecciones legislativas (C 19/4).

El tercer y último caso, lo tenemos en la Capital Federal. Allí, el PJ porteño volvió a tener conducción, tras un año de intervención de la justicia. En este ejemplo, la disputa no necesitó llegar a la realización de internas, ya que se presentó una única lista de unidad, en la que el reparto de cargos deja a las claras la composición de fuerzas existentes. El día 17, fue proclamado presidente del PJ porteño el actual Jefe de Gabinete, Alberto Fer-

nández. La nueva conducción tiene como vicepresidente al actual secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, y aparecen también con cargos el ministro de Educación, Daniel Filmus, y el de Trabajo, Carlos Tomada. También participa del acuerdo el actual vicepresidente, Daniel Scioli.

De esta manera, el kirchnerismo controlará gran parte del PJ porteño, manteniendo la alianza con sectores del duhaldismo, sobretodo vinculados a Tomada. Quienes quedaron fuera de esta repartija, claramente, son los sectores del PJ que apoyan a Mauricio Macri (C 18/4).

El movimiento obrero, hacia fuera y hacia dentro.

Como veíamos en *Pelea por las ganancias*, la disputa salarial fue uno de los ejes en torno a los cuales giró el mes de abril. Esto se dio no sólo en el marco de negociaciones entre las centrales obreras y las cúpulas empresarias con la intermediación del gobierno, sino sobre todo por la cada vez más visible lucha de trabajadores organizados, lo cual se puede ver más abajo, en *Conflicto social*.

Sin embargo, en las luchas que se vienen desarrollando durante los últimos meses, debemos destacar un factor común, que ya habíamos señalado en el *Análisis...* N° 55. Se trata de la organización de los trabajadores por fuera de (o a pesar de) las estructuras sindicales existentes, sobre todo de la CGT. En ese momento analizábamos los casos del subterráneo y de los telefónicos, en los que las cúpulas sindicales habían actuado más bien como mediadoras que como representantes de uno de los sectores en pugna. Ese desborde sufrido por la central obrera volvió a repetirse durante abril. El primer ejemplo de ello lo tenemos en los docentes de Salta, quienes mantuvieron, desde mediados de marzo, un paro durante siete semanas. Dicha medida estaba organizada en forma autoconvocada, no respondiendo a las estructuras sindicales correspondientes. Por otro lado, los trabajadores no médicos de hospitales públicos se organizaron también como “autoconvocados”, desoyendo a sus sindicatos que los llamaban a seguir negociando antes de tomar medidas de fuerza.

Otra particularidad surgió en el conflicto de los trabajadores de la aerolínea LAFSA, enrolados en la CTA, quienes realizaron medidas de fuerza. Allí, se dio la situación de un paro de los trabajadores del subte, sólo en solidaridad con los de LAFSA, situación que rompe con la lógica corporativa de las luchas sectoriales.

Como vemos, la lucha de intereses no es exclusividad, ni mucho menos, de la interna del PJ bonaerense.

Conflicto social

Los principales acontecimientos registrados en el mes de abril fueron:

24 huelgas parciales –entre las que destacamos la huelga de dos meses realizada por los trabajadores docentes de la provincia de Salta–; 8 jornadas de marchas y actos; 6 jornadas de cortes de ruta, calles, autopistas, puentes; 2 jornadas de clases públicas

Las organizaciones y agrupamientos que protagonizaron las jornadas fueron: Docentes de la provincia de Salta 9

Docentes de la provincia de Chaco (CETERA, ATECH, SITECH) 2

Trabajadores de la salud (ATE)–Htal Garrahan y Htlas y centros asistenciales del Conurbano bonaerense) 10

Asociación de Profesionales (del Htal Garrahan) 3

Trabajadores de la salud “autoconvocados” (ATE, UPCN, Sutecha) –Htales Ramos Mejía, Ricardo Gutiérrez y Teodoro Álvarez– (2); trabajadores fleteros (SUFRA) –gremio enfrentado con el dirigente Hugo

Moyano– (2); Bloque Piquetero (2); CCC (2); MIJD (2); MTD Anibal Verón (2); MST Teresa Vive (2);

Con una acción, Docentes y estudiantes universitarios (Facultad de Ingeniería, UBA); trabajadores del Estado (ATE); trabajadores de Lafsa; trabajadores de los subterráneos; trabajadores del Transporte Automotor (AOITA); trabajadores de la salud (Salta); trabajadores judiciales (Salta); docentes (CETERA) CTD Anibal Verón; Martín Fierro; Frente Barrial 19 de Diciembre.

Entre las principales demandas y consignas observamos: aumento salarial (23); Repudio a la represión policial (3); rechazo a medidas de control laboral (3); aumento en el monto y/o cantidad de los planes sociales (2); sanción de una nueva Ley de Educación (1); libertad y desprocesamiento de manifestantes y/o militantes (1); repudio al FMI y al BM (1)

trabajo genuino (1); rechazo a la suba de precios (1); aumento del presupuesto universitario y democratización del cogobierno (1).